

La Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), Guerrero

The organization of ecologist farmers of the Sierra of Petatlán and Coyuca de Catalán (OCESP), Guerrero

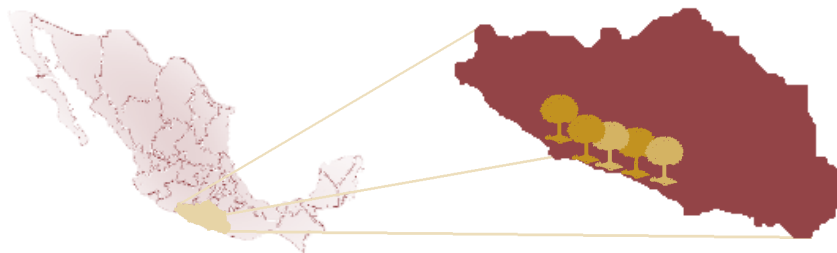
En 1995, un año después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el gobierno del estado de Guerrero firmó un contrato que concedía a la empresa forestal multinacional Boise Cascade, la concesión y el derecho exclusivo de compra y explotación de madera en los ejidos de la Costa Grande de Guerrero. La empresa Boise Cascade, con sede en Idaho, Estados Unidos ha dirigido sus operaciones hacia países en los que las leyes ambientales son más flexibles y las condiciones de pobreza permiten hacer negocios a costa del medio ambiente y las condiciones de vida de la población.

La explotación forestal de la región de la Costa Grande de Guerrero data de finales del siglo XIX. La historia de la explotación forestal ha evolucionado desde los latifundios españoles y norteamericanos hasta las concesiones a favor de empresas madereras locales. Los inversionistas nacionales y extranjeros encontraron históricamente formas legales e ilegales para burlar los límites a la concentración de la tierra y los bosques establecidos en las leyes mexicanas. Tampoco la

In 1995, one year after the North American Free Trade Agreement (NAFTA) took effect, the state government of Guerrero signed a contract with the timber giant Boise-Cascade that granted the transnational corporation “the concession and exclusive right to buy and harvest wood in the ejidos of the Costa Grande of Guerrero.” Boise-Cascade, based in Idaho, U.S.A., has recently looked abroad to locate a large part of its operations in countries where environmental laws are more lax and conditions of poverty permit cheaper labor costs.

Logging in the Costa Grande dates back to the later part of the 19th century. Timber harvesting in the region has evolved from the Spanish plantations, to large-scale American-run operations in the mid-20th century, to state-run concessions in the name of local wood industries. National and foreign investors have always found legal and illegal ways to evade the limits to land and forestry holdings established under Mexican post-revolutionary law. Not even the collective landholdings (60% of Guerrero’s forests are ejidos—collective farms—or communal property) or the existence of state-run forestry industries constituted a serious obstacle to massive clear-cutting.

Problems of indiscriminate logging in the Costa



propiedad colectiva (60% de los bosques de Guerrero son ejidales o comunales), o la existencia de organismos estatales forestales, fueron obstáculo para una explotación silvícola inmoderada.

Si bien los problemas forestales de la Costa Grande de Guerrero no se iniciaron con la entrada en vigor del TLCAN, lo que este acuerdo ha propiciado -junto con las modificaciones consti-

Grande of Guerrero didn't begin with NAFTA. But the trade agreement, along with changes in the Mexican constitution under ex-President Salinas, legitimized and deepened a method of forestry use that delivers huge economic benefits to transnational corporations and their national partners at the cost of natural resources and local populations.

By the nineties, clear-cutting in the region had

"México ocupa actualmente el cuarto lugar mundial en diversidad de especies forestales, a pesar de que cada año pierde entre 125 mil y 237 mil hectáreas de bosques, en tanto que la pérdida anual en selvas se estima entre 189 mil y 500 mil hectáreas. Esto implica que México se encuentre según estimaciones de la FAO- en los límites marginales de la conservación de sus bosques y selvas: pérdida anual mínima de 250 mil hectáreas y pérdida máxima de 850 mil."

Fuente: Estadísticas del Medio Ambiente, INEGI-SEMARNAP, México 1997.

Mexico holds fourth place among all countries for the diversity of its woodlands species, in spite of the fact that every year we lose between 125,000 and 237,000 hectares (585,627 acres) of forests. The annual loss in jungles is estimated to be between 189,000 and 500,000 hectares (1,335,500 acres). According to estimates of the FAO, Mexico is currently on the verge of being unable to conserve its forests and jungles since this limit is defined as "a minimum annual loss of 250,000 hectares and a maximum loss of 850,000." Source: Estadísticas del Medio Ambiente, INEGI-SEMARNAP, México 1997.

tucionales que le antecedieron- es la legitimación, legalización y profundización de una forma de explotación de los bosques, que otorga enormes beneficios a los capitales transnacionales y sus asociados nacionales a costa de los recursos naturales y de las poblaciones locales.

La explotación forestal en la década de los noventa llegó a un punto peligroso, según Greenpeace, imágenes de satélite tomadas en 18 localidades de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, entre los años 1992 y 2000 muestran que se perdieron 86 mil hectáreas de bosques de las 226,203 que existían, es decir, el 38 por ciento del bosque se perdió por la tala excesiva e ilegal.

Los campesinos de la zona empezaron a observar que los ríos se secaban, algunas especies comenzaron a escasearse, la erosión del suelo aumentó de forma considerable y el período de lluvia disminuía. En un testimonio un campesino de la sierra de Petatlán indica:

"Solíamos cosechar más de tres toneladas de maíz por hectárea sin fertilizante, ahora no logramos ni siquiera la mitad usando fertilizante. Ahora ni siquiera se puede cosechar lo suficiente para la familia".

reached a dangerous extreme. Greenpeace reported that satellite images taken in 18 points of the Sierra Petatlán and Coyuca de Catalán between 1992 and 2000 show a loss of 86,000 hectares forest, out of the 226,203 that existed—a staggering 38% of the forest has been lost due to illegal and excessive logging over just eight years.

The campesinos of the zone began to see their rivers dry up, familiar plant and animal species gradually die off, and soil erosion intensify noticeably. The rains decreased, causing serious problems for farmers. One peasant from Sierra Petatlán notes:

"We used to harvest more than three tons per hectare without fertilizers. Now we can't produce half of that using fertilizers. Now we don't even harvest enough for the family."

At about 6 dollars per cubic meter of wood—three times that paid by local buyers—wood rolls arrived at the sawmill in Costa Grande 24 hours a day. However, the real earnings from the sales never reached local workers. Although the company offered work to local inhabitants of the communities, pay was low.

In 1998, a group of peasant farmers that had been organized for many years formed the Organization of

En 1998 un grupo de campesinos que venían luchando desde años atrás, formaron un Asociación Civil con el nombre de Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCSEP). Rodolfo Montiel Flores junto con Teodoro Cabrera encabezan la organización de campesinos de los 24 ejidos de la zona del Filo Mayor, lugar donde operaba la empresa Costa Grande Forest Product (CGFP), subsidiaria de Boise Cascade.

En un principio, la organización de los campesinos ecologistas emprendió una campaña de concientización –incluyendo empleados y trabajadores de la empresa– a fin de evitar la tala, reforestar y organizar a la comunidad. Solicitaron la intervención de las autoridades de protección ecológica local y federal; posteriormente llevaron a cabo lo que ellos llaman “paros de madera” que implica el bloqueo de caminos por parte de la comunidad para evitar la salida de la ma-

“... Yo trabajé un año de ‘trocero’, pero a nosotros nos pagaban treinta pesos por día. Los madereros están allá abajo y acá arriba están los caciques, ellos son una sola persona. Ellos son los que nos pagaban”. José Laderos Ortiz, campesino del Ejido El Mameyal.

dera en rollo de la sierra y propiciar el diálogo con los transportistas. Simultáneamente emprendieron una campaña de difusión local y nacional e invitaron a organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales a apoyar su movimiento y darle presencia.

Con un valor de 60 pesos por metro cúbico, tres veces más de lo que pagaban los compradores locales, la madera en rollo llegaba las 24 horas del día al aserradero de Costa Grande. Sin embargo, los beneficios de la compra nunca llegaron a los trabajadores locales. Si bien la compañía ofrecía trabajo a los habitantes de las comunidades, éste era mal pagado.

Debido a los paros de madera implementados por la OCSEP y tras tres años de movilización, en abril de 1998, Boise Cascade terminó sus operaciones alegando “condiciones de negocios difíciles”. En febrero de 1998 Bernardino Bautista,

Farmer Ecologists of the Sierra Petatlan and Coyuca de Benitez (Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán-OCSEP). Rodolfo Montiel and Teodoro Cabrera headed the organization of farmers from 24 ejidos in the Filo Mayor area, where Costa Grande Forest Products, a subsidiary of Boise-Cascade, operated.

The first action of the newly formed organization of ecologist farmers was to mobilize a public-awareness campaign among local residents and employees and workers of the logging company to put an end to clear-cutting and initiate reforestation programs and community organization. They requested the intervention of local, state and federal environmental protection companies to stop clear-cutting. Later they carried out what they called “wood stoppages” (paros de madera) where the community blocked access roads to stop company trucks from transporting the rolls of wood out of the mountains, and to open up dialogue with the truckers. Simultaneously they began a pub-

“I worked a year as a ‘trocero’ but we were paid less than three dollars a day. The loggers were even lower and above us were the caciques (local rural bosses). They were the ones who paid us.”

José Laderos Ortiz, Ejido El Mameyal

licity campaign in local and national media and invited national and international non-governmental organizations to join their cause and spread word of their movement.

After three years of the public-awareness campaign and “wood stoppages” staged by the OCSEP, in April of 1998 Boise-Cascade ended operations, alleging “difficult business conditions”. In February of 1998, Bernardino Bautista, a local cacique, requested the intervention of the Mexican Army in the area, arguing that he had been the victim of harassment by armed groups operating in the vicinity of Petatlan.

The presence of the army has been a constant in the zone since the seventies. Jesus Sanchez describes the situation:

“...for years the army has stayed in the Sierra without ever leaving, justifying its presence by saying there are drugs and looking for people in masks.

un cacique local, solicitó la intervención del ejército mexicano, argumentando que había sido víctima de hostigamiento por parte de los grupos armados que actúan en Petatlán.

La presencia del ejército ha sido constante en la zona desde la década de los setenta. Jesús Sánchez lo describe así:

“... desde hace años el ejército no se despega de la sierra achacando su presencia a que hay drogas y buscando gente encapuchada. Por aquí nunca se ha visto que encuentren gente encapuchada (...) Desde 92 que comenzamos con los paros mandaron a todo el ejército a la sierra...”

La militarización de la sierra guerrerense fue el preámbulo de lo que en 1999 detonaría la intervención de organizaciones no gubernamentales en todo el mundo. El 2 de mayo de ese año, soldados del 40º batallón de infantería entraron disparando a la comunidad de Pizotla mataron a Salomé Sánchez Ortiz y detuvieron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera a quienes torturaron y mantuvieron incomunicados por 5 días, durante los cuales fueron obligados a firmar declaraciones por supuesta portación de armas de uso exclusivo del ejército y siembra de marihuana.

A pesar de que la defensa de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera ha demostrado en reiteradas ocasiones que los cargos que se les imputan son falsos y que sus declaraciones fueron obtenidas bajo tortura, ambos ecologistas continúan presos en el penal de Iguala en Guerrero, y han sido condenados a 6 y 10 años de prisión respectivamente.

La intervención de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y ambientalistas, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos permitió montar una red de comunicación internacional —en particular por Internet— a través de la cual se difundió la lucha de los campesinos ecologistas y su injusto encarcelamiento. De este modo, la lucha por la defensa de los derechos humanos aunada a las reivindicaciones ambientales, logró una impresionante solidaridad internacional: Amnistía Internacional los de-

Around here we've never run into anyone in a mask... Since 1992 when we started the roadblocks, they sent the army into the mountains.”

Military presence in the Sierra of Guerrero was the preamble to a 1999 event that catalyzed action among human rights organizations throughout the world. On May 2nd, soldiers from the 40th Infantry Battalion entered the community of Pizotla firing their guns. They killed Salomé Sanchez Ortiz and arrested Rodolfo Montiel and Teodoro Cabrera. Montiel and Cabrera were tortured and held incommunicado for five days, during which they were forced to sign confessions of alleged possession of illegal firearms and cultivation of marijuana.

Although Montiel and Cabrera's defense attorneys have demonstrated on several occasions that the charges imputed to them are false and that their declarations were obtained under torture, both ecologists are still being held in prison in Iguala, Guerrero, sentenced to six to ten years, respectively.

Human rights and environmental organizations have intervened on their behalf, as well as the National Human Rights Commission. An international communications network, especially on the Internet, has worked to publicize the case of the ecologist farmers and their unjust imprisonment. The defense of their rights and the environmental demands of their communities has generated an impressive international solidarity movement: Amnesty International declared them political prisoners, and on April 6th, 2000 the environmental organization “The Goldman Foundation” awarded the Goldman Environmental Prize to Rodolfo Montiel.

In his first visit to the United States several months later, then president-elect Vicente Fox was challenged by Amnesty International president Pierre Sané to prove his government's commitment to human rights by freeing the ecologists Rodolfo Montiel and Teodoro Cabrera.

In February of 2001, Rodolfo Montiel received the “Chico Mendes Prize” from the Sierra Club. The prize was delivered to Montiel behind bars in the federal prison in Iguala by international human rights activist, Ethel Kennedy.

Montiel and Cabrera are still in jail although the president has made a public commitment to review their case. The promised review owes to the pressure

claró presos de conciencia y la organización ecologista, The Goldman Foundation, entregó el 6 de abril del 2000 el Premio Medioambiental Goldman a Rodolfo Montiel.

Meses más tarde, en la primera visita del entonces presidente electo Vicente Fox Quesada a Estados Unidos, el presidente de Amnistía Internacional, Pierré Sané, lo abordó y le exigió la liberación de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera como muestra de que el nuevo gobierno será respetuoso de los derechos humanos.

En febrero del 2001, Rodolfo Montiel recibió un nuevo premio, esta vez el Chico Mendes otorgado por la organización ecologista Sierra Club. El premio fue entregado a Montiel en la rejilla del penal federal de Iguala de manos de la defensora de los derechos humanos, Ethel Kennedy.

Montiel y Cabrera siguen en la cárcel aunque existe el compromiso presidencial de revisar su caso. Ésta es sin duda una victoria de la enorme presión y solidaridad internacional en defensa de los ecologistas campesinos de Guerrero.

Sin embargo, el problema ambiental sigue sin resolverse. Si bien Boise Cascade se ha retirado, la tala inmoderada continúa y la organización ecologista enfrenta el gran reto de plantear alternativas de uso y manejo sustentable del bosque. La necesidad de avanzar hacia propuestas comunitarias fue expresada con nitidez por el regidor de ecología del municipio de Petatlán, quien al presentar por primera vez el “Proyecto de desarrollo productivo de la región de la Sierra de Petatlán” resumió:

“Demandamos primeramente asesoría técnica, porque nosotros estamos formando un proyecto que es el que nosotros vamos a presentar como alternativa de vida para esta sierra, porque ya no queremos que se sigan cortando árboles, porque eso lleva a que se termine el agua y acabarse el agua es terminarse la vida, así lo consideramos nosotros y por eso estamos aquí luchando...”

brought by the international solidarity movement in defense of the farmer ecologists of Guerrero.

Nonetheless, the environmental problems have still not been resolved. Although Boise Cascade has withdrawn from the region, clear-cutting continues and the regional ecology organization faces the tremendous challenge of developing alternatives for the sustainable use and management of the forests. The need to move on to community proposals was expressed concisely by the environmental councilman of the Petatlan municipal government, when he presented the “productive development project for the Sierra of Petatlan region:

“We demand, first off, technical advising, because we are creating a project that is the one we are going to present as an alternative of life for this Sierra. We don’t want them to keep on cutting trees, because it leads to less water and when the water runs out life ends. That’s what we think and so we are here fighting...”

